

## Liquidar la corrupción / y 5

La corrupción es un tema manoseado y favorito de mucha gente. No hace mucho arremetió con penetrante intención la pluma de Luis María Ansón contra su persistente y generalizada vigencia. Hay quien supone que atacar a la corrupción producirá óptimos dividendos electorales, teniendo en cuenta el clima encendido que se mantiene en torno a la cuestión en la opinión pública. El asunto «Lockheed», que ha saltado de modo preponderante a las páginas de la actualidad, no es sino un exponente de esa sensibilización popular. Hay una extendida sospecha de generalizada y universal corrupción en el sistema, a la que, incluso, hacen alusión las celebradas «Memorias» de los generales Franco. ¿Existe todavía entre nosotros esa corrupción global? ¿O son los españoles, como pueblo, más proclives a caer en la tentación de peculado que el resto de los mortales?

Pienso que el español no es más ni menos honesto que los demás pueblos evolucionados. El porcentaje de gentes indeseables o de bribones que de nuestro pueblo, no es superior, ni inferior, al de cualquier otra nación de la Europa occidental. España está formada por una inmensa mayoría de gente decente en cualquiera de las clases sociales que la componen. La corrupción evidente, que ha sido una de las tremendas lacras sociales de los últimos años, ha tenido su origen en la estructura y en el funcionamiento del sistema político y no

en la idiosincrasia de los ciudadanos.

El poder fue ejercido durante cuarenta años sin un verdadero sistema fiscalizador de la sociedad. Operaba sin límites en su arbitrario ejercicio y ni siquiera la existencia de unas Cortes franquistas sirvió para contrastar realmente las áreas del ejecutivo. Las aprobaciones del presupuesto eran simples cajetines favorables, que jamás plantearon una cuestión o demandaron aclaraciones a los planes de la Administración, ni a sus gastos, ni a sus cuentas. La zarabanda de miles de millones de dispendio público pasaba por las comisiones y los plenos en medio del sesteo general. Pues si tal era el talante del Parlamento orgánico, ¿cuál iba a ser el de otros organismos y corporaciones subalternos como Ayuntamientos y Diputaciones? Nadie controlaba de un modo riguroso ningún gasto del poder desde la sociedad.

Y esta es la clave y la raíz original del tremendo mal. La coacción moral de una sociedad libre, con alto nivel real de crítica informativa, es el mejor —y a veces el único— antídoto contra la corrupción. Que las cosas lleguen a saberse y a publicarse es el freno auténtico que existe contra la inmoralidad administrativa. Mientras un sistema funcione escondi-

JOSE MARIA DE AREILZA

do tras las murallas del misterio, de la lejanía y de la omnipotencia del poder, la picaresca brotará dentro de él como sarpullido natural debido a la falta de ventilación. Las licencias, las adjudicaciones, los concursos, los permisos, las transferencias, las comisiones, las subastas, las adquisiciones, todo el engranaje gigantesco de una administración no sometida al riesgo de la crítica ni de la noticia pública han amontonado en estas décadas toneladas y toneladas de favoritismos, combinaciones, circuitos cerrados, correas transmisoras, monopolios, carteles, tinglados y cifras astronómicas de beneficios acumulados. Pero en cualquier país de cualquier continente, un sistema parecido hubiera dado exactamente los mismos resultados. La naturaleza humana es profundamente igualitaria en sus flaquezas y en sus reacciones.

¿Cómo liquidar la corrupción y hacerla desaparecer de nuestra vida pública? ¿Hay que denunciar los casos más flagrantes y conocidos? ¿Hay que crear comisiones investigadoras para que analicen exhaustivamente los oscuros túneles del latrocinio público? Tengo escasa fe en tales procedimientos y pienso que conducirían a soluciones de-

magógicas de poca o ninguna eficacia. Lo importante, lo decisivo, es cambiar el sistema y llenar de claridad informativa y conciencia crítica el ámbito de la administración, el manejo de los caudales públicos, la justificación del gasto presupuestario y todas las decisiones del poder que envuelvan repercusiones económicas. El programa económico para la democracia ha de exigir transparencia en la conducta, hasta la exageración. Los países de sistema democrático, sin excepción, se caracterizan por llevar hasta el límite y aún más allá de lo que parece, a veces, razonable, su escarpelo crítico, como puede verse a diario en los Estados Unidos, en Holanda y en Gran Bretaña, por no citar sino tres ejemplos de reciente actualidad.

Liquidar la corrupción no es tanto iniciar un proceso gigantesco contra los corruptos, hipótesis probablemente inviable, sino poner inmediatamente en práctica el nuevo clima administrativo, sin triunfalismos de poder en supuestas decisiones inapelables. Aquí se ha de saber sin trabas ni restricciones, y cuanto más, mejor. La corrupción retrocederá a medida que vaya entrando la luz en los establos de Augias que tanto trabajo costó limpiar al gigante Hércules.

A una administración transparente no contagiará fácilmente la universal epidemia. Pero esa luz la tiene que procurar, sobre todo, la crítica informativa y los medios de comunicación independientes, además de los parlamentos y corporaciones elegidas por el sufragio popular.

La corrupción es un resultado, no un punto de partida. Nadie sale de casa para iniciar la guerra de los treinta años. Ningún empresario, o ejecutivo, o ciudadano, o comerciante, o industrial se propone «a priori» corromper a un funcionario o comprar sus decisiones. Tampoco es cierto que los hombres que encarnan físicamente a las Administraciones públicas sean fáciles al soborno. La inmensa mayoría de nuestros funcionarios son totalmente inasequibles a esa clase de manejos. Lo que ha sido hasta ahora inmoral y ha forzado a muchos —de uno y otro lado de la ventanilla— a caer en el vicioso sistema ha sido el sistema mismo, con sus arbitrariedades, sus secretos, su inapelabilidad, sus tremendos malos ejemplos en los pisos superiores del edificio. Eso es lo que tiene radicalmente que modificarse para hacer posible el logro de la democracia.

¡Ah!, ¡sí! Y estoy de acuerdo en que una amnistía total alcance, como su nombre indica, a todos los delitos, borrando la memoria de su existencia. Pero, eso sí, mirando al mañana, bien está que haya «borrón», pero no empecemos nunca más con una «cuenta nueva».